

Por María Ana Mandakovic*

Nada fácil la consigna de este 37º Congreso de Trabajadores y Trabajadoras de la Prensa y la Comunicación. Primero, porque a simple vista suena antigua: ¿quién habla hoy de derrotar el neoliberalismo?, si pareciera que con la pandemia recibió la cachetada más fuerte de su vida, mientras la gran idea de la globalización retrocede, los estados se fortalecen para poder dar respuestas concretas a las necesidades más básicas de la población.

Frente a este interrogante, nos atrevemos a responder que los trabajadores y trabajadoras sabemos que el poder hegemónico no resigna nada, y mucho menos en una situación como ésta. Por eso es fundamental fortalecer nuestras organizaciones para que no nos hagan retroceder nunca más.

Asistimos a una crisis sin precedentes a nivel mundial. La pandemia ha generado consecuencias impensadas para las economías de todos los países y puso en jaque los mezquinos intereses del capital concentrado, que sin disimulo instaló la falsa disyuntiva entre vida y economía, como si eso fuera una opción posible. Esta contradicción irreconciliable se ha convertido en la herramienta retórica preferida de los ideólogos del neoliberalismo que buscan persuadir, manipular, sembrar dudas para convencer a la población sobre que todo lo que haga el Estado pone en riesgo las libertades, cuando su única preocupación es la libertad del mercado.

Así fuimos testigos durante estos meses de un sinnúmero de provocaciones como las marchas anticuarentena lideradas y fogoneadas por una oposición irresponsable capaz de aprovecharse de la peor situación social para buscar su beneficio; también fuimos testigos de la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud que se sostuvo gracias al esfuerzo y la vida de sus profesionales y trabajadores. A muchos de ellos les debemos nuestras vidas y no da para pedir ni aplausos ni considerarlos héroes, solamente decir, con voz muy alta, que exigimos que su trabajo sea reconocido con salarios y condiciones dignas.

Sin lugar a dudas, este virus mundial agudizó el distanciamiento social entre diferentes grupos y sectores sociales. El “quedate en casa” no es igual para todes.

Por eso decimos y, volvemos a repetir, que para salir de esta crisis hay que distribuir la riqueza. A 20 años de la Marcha Grande, desde la CTA Autónoma, de la que orgullosamente formamos parte, promovemos una Renta Básica Universal que garantice el acceso a bienes y servicios indispensables para una vida saludable.

Sostenemos la suspensión de pagos de una deuda externa ilegítima, ilegal e inmoral que debe ser investigada. Exigimos la urgencia de una reforma tributaria, integral y progresiva y eso demanda implementar de inmediato el gravamen a las grandes fortunas. Reclamamos un Estado presente con la decisión más firme que nunca de promover el desarrollo productivo, la soberanía alimentaria, energética, tecnológica y, por cierto, la comunicacional.

La pandemia puso al descubierto muchas desigualdades, el acceso a Internet es una de ellas. El DNU del Gobierno, que declaró servicio esencial a las telecomunicaciones y prohibió aumentar los precios a las empresas proveedoras fue

una buena señal. Pero no nos alcanza porque el no incremento de las tarifas no es sinónimo de mayor conexión en todo el territorio nacional.

El modelo de desarrollo futuro de las comunicaciones es estratégico. Nuestra soberanía comunicacional requiere de satélites nacionales que puedan mantener las órbitas asignadas a nuestro país que, por su ubicación, son determinantes para garantizar la conexión. El proyecto SAOCOM fue un gran logro de la CONAE y de todo nuestro sistema científico y tecnológico. Demostró que podemos estar en el espacio generando información útil. Si no los tuviéramos, tendríamos que comprar esa información a otros países.

Por eso, sostenemos la importancia del control nacional de las telecomunicaciones argentinas, con participación de los trabajadores y usuarios bajo el principio de que las telecomunicaciones son un derecho humano y no una mercancía.

Es necesario avanzar en la recuperación del rol del Estado, instrumentando todos los mecanismos para convertir a ARSAT en una empresa pública fuerte, para el control público de las telecomunicaciones, las plataformas digitales, la búsqueda satelital y los datos.

Sin soberanía comunicacional no habrá soberanía productiva, alimentaria, tecnológica y mucho menos, posibilidades de desarrollar más y mejor democracia.

Nos dijeron que Internet nos daría más libertad pero estamos cada vez más controlados; los nuevos dueños del mundo son justamente los que manejan los datos. Google, Facebook, Microsoft, Apple y Amazon hoy tienen un poder tan grande y concentrado que pone en juego no sólo el equilibrio del mercado, sino también las libertades y los derechos de las personas en cada rincón del mundo. Los algoritmos mandan.

En este escenario, la preocupación nos invade a todos los trabajadores en general, pero a los de prensa y comunicación en particular, porque nuestra actividad, desde hace años, está en peligro.

Desde la FATPREN ya señalamos tiempo atrás que estos gigantes tecnológicos tienen garantizado el monopolio del comercio publicitario mundial por zonas geográficas. El valor bursátil de estas empresas llega a superar el PIB de decenas de países. Necesitamos que en nuestro país se tomen medidas para regular esta situación.

Justo hace 40 años atrás, el canadiense McBride presentaba un informe a la UNESCO en donde advertía sobre los problemas de la concentración de la información y la producción cultural-ideológica. El informe McBride, daba cuenta de cómo la producción cultural, en vez de ser liberadora de la humanidad, se transformaba en una poderosa arma de control social e imponer un discurso único.

Hoy, convergencia tecnológica mediante, aquel informe sigue teniendo más vigencia que nunca. La sugerencia de “darle voz a los que no tienen voz”, de “un solo mundo con voces múltiples” que levantara ese organismo internacional no está muerta: se reaviva en cada una de las experiencias de proyectos comunicacionales,

de medios alternativos, comunitarios, populares y cooperativos o de autogestión instalados en sus territorios y trabajando para producir información local y precisa, sin recibir ni contar con políticas que los sostengan.

Por eso, nos atrevemos a afirmar que para garantizar el derecho a la comunicación, para conseguir esa pluralidad de voces, hay que replantear el sistema de medios de nuestro país. No sólo dando cuenta de la presencia de los grupos mediáticos privados, sino también fortaleciendo a los medios públicos y, por sobre todo, reconociendo los proyectos comunicacionales colectivos con políticas públicas que contemplen su asistencia con recursos suficientes para garantizar su sostenibilidad y sustentabilidad.

La mayoría de los medios de comunicación subsisten debido a la pauta oficial ya sea nacional, provincial o municipal. En muchas provincias se gasta más en pauta oficial que en salud.

Esta pauta publicitaria nunca llega a los bolsillos de los trabajadores y, prueba de eso, es reconocer que la actividad periodística en estos últimos años ha sido la más flexibilizada, bastardeada y afectada por la pérdida de puestos de trabajo.

Es necesario poner en agenda la distribución de los recursos por pauta publicitaria del Estado en todos sus niveles. Es una decisión política a quién se le asignan los montos; pero también es una decisión política destinar un porcentaje de esos fondos a los medios comunitarios, los autogestivos, las cooperativas de comunicación. Y nuestro sindicato puede aportar sus conocimientos sobre el sector a los fines de que quienes, de verdad, contribuyen en estos tiempos a la pluralidad de voces puedan crecer y superar la mera subsistencia.

Respecto de la pauta oficial, hay que decir también que los medios hegemónicos llevaron adelante en esta pandemia un discurso mediático tendencioso e irresponsable respecto de las políticas sanitarias y las restricciones para evitar muertes de argentinas y argentinos por el virus. Ni qué hablar de la recurrente violencia mediática, con mensajes de odio y hasta apologías del terrorismo de Estado. Entonces, bien podría el Estado exigir a estos empresarios beneficiarios de millones, el debido respeto a la Ley de Defensa de la Democracia; y la difusión responsable de las disposiciones excepcionales por una crisis sanitaria. Esto no es descabellado; se trata de un Estado que hace respetar el contrato social que asumió nuestro pueblo desde la recuperación de la democracia, hace ya 37 años, los mismos años que cumple nuestro Congreso.

Las trabajadoras y los trabajadores de la prensa y las comunicaciones, fuimos considerados esenciales por Decreto. Nadie duda de la función social de nuestro oficio y sabemos que la información es fundamental para organizar la sociedad. Sin embargo, la condición establecida de esencialidad no se traduce en todos los casos en trabajo seguro y, mucho menos, bien remunerado.

Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, muchos y muchas nos vimos obligados a trabajar sin contar con protocolos oficiales de higiene y seguridad; se generalizó el teletrabajo lo que se tradujo en una mayor exigencia para el trabajador, ya que en la mayoría de los casos esta modalidad nos encontró desde

nuestras casas, utilizando nuestras propias herramientas y recursos para garantizar la conexión, a la vez que pasamos a una “hiperconectividad” que parece no tener fin.

Esta situación de precarización/explotación se profundiza aún más si las trabajadoras somos mujeres y si estamos a cargo de las tareas de cuidado de hogares, niños y/o adultos mayores. En este marco, no hubo, ni hay forma de contrarrestar los abusos de las patronales porque, al menos en esta provincia, la posibilidad de hacer inspecciones en los lugares de trabajo está suspendida aunque podamos ir al shopping todos los días.

Recién luego de seis meses logramos reabrir la paritaria de este año, una vez más la propuesta de las empresas pisotea los salarios y desvaloriza nuestra tarea. Por eso ayer, 11 de noviembre los y las trabajadoras de prensa y comunicación de Córdoba paramos. Paramos para reclamar un aumento salarial que alcance a cubrir la canasta básica alimentaria. Paramos para recuperar nuestra dignidad. Hoy les seguimos decimos a los empresarios de los medios de la provincia de Córdoba que no nos alcanza, que con salarios de hambre no se puede trabajar y que esta lucha no es sólo de los trabajadores de prensa de Córdoba; porque desde la Fatpren, juntos con los sindicatos de todo el país, vamos a nacionalizar nuestro reclamo y sumarnos al plan de lucha propuesto por la Federación.

Hoy, la Patria Grande vive un momento significativo. Las hermanas y hermanos bolivianos, su pueblo, nos dieron el ejemplo. Derrotó en las urnas pacíficamente al golpe de Estado impulsado por los Estados Unidos y restauró la democracia, su espíritu de independencia, soberanía e integración latinoamericana. Una realidad que trae esperanzas para la región, que reafirma la solidaridad de los pueblos y la lucha contra el pensamiento colonial y patriarcal.

En este contexto, hoy más que nunca, los y las trabajadoras debemos apelar a lo mejor de nuestra historia, que es la historia de la organización y lucha por la conquista de nuestra dignidad y la construcción de una sociedad más igualitaria.

Se ha perpetrado en estos dos meses un golpe de mercado cuya consecuencia se traduce en más ajuste para los y las trabajadoras y para los que menos tienen. Una vez más la salida no contempla soluciones de fondo para los más desprotegidos. Nada justifica firmar un presupuesto conforme a las exigencias del fondo monetario internacional mientras seis de cada diez niños en nuestro país tienen hambre.

Es en este punto que el ejemplo de Agustín Tosco adquiere especial relevancia y a 45 años de su muerte, su voz resuena en cada lucha llamando a la unidad de la clase trabajadora. Esa unidad, hoy por hoy, nos marca el camino y la necesidad de articular a todos los sectores, organizaciones sindicales, universitarias, barriales, movimientos sociales, de la economía popular, de la cultura, de los derechos humanos para construir una correlación de fuerza dispuesta a dar la disputa en la calle para fortalecer desde el pueblo un verdadero proyecto nacional y popular, sin agachadas sin ajustes de ningún tipo.

Las trabajadoras y trabajadores no debemos resignar nuestra participación política para articular, junto a otros sectores, propuestas que realmente respondan a nuestras necesidades.

Al cumplir tres años de gestión, quisiéramos reseñar algunas cuestiones que atravesaron el trabajo diario. Y, porqué no, algunos logros que deben destacarse. Asumimos en un momento por demás difícil en el aspecto económico, con un gobierno nacional claramente refractario a los intereses populares.

Logramos equilibrar, apenas equilibrar, las cuentas de nuestro Cispren. Llegamos con la incertidumbre sobre si éramos capaces de sostener la institución y hoy vemos un horizonte más despejado. Aprendimos que nuestra función es gestionar y promover políticas públicas de promoción y contención para la actividad

Aún con los ingentes problemas que había que asumir, logramos objetivos importantes para nuestra organización sindical. El regreso a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) significó un gran paso en el camino de integrarnos a sindicatos de base de todo el país.

También llevamos adelante -y lo concretamos aún con las restricciones por la pandemia- el proyecto de un Registro Provincial de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa, el RETRAPREN. Con el compromiso de compañeras y compañeros; y el asesoramiento de grandes profesionales como los doctores Miguel Rodríguez Villafañe y César Arese, pudimos lanzar esta herramienta fundamental para consolidar la organización de todas y todos quienes en la inmensa geografía de Córdoba desarrollan, de diversas formas posibles, trabajos vinculados a la prensa y la comunicación. La implementación del RETRAPREN nos impuso mejorar nuestro sistema administrativo, permitiendo la realización de trámites de manera remota y extendiendo la credencial que los acredita como trabajadora o trabajador de prensa. La utilidad de una credencial digital se vio con claridad cuando la cuarentena era más estricta: las compañeras y compañeros pudieron desarrollar sus tareas y circular sin impedimentos, a partir de la validez de nuestra credencial y el reconocimiento al RETRAPREN por parte de las autoridades.

Finalmente, y como creemos en un sindicato profundamente democrático, decidimos modificar nuestro Estatuto para incorporar no sólo una Secretaría de trabajo Autogestionado sino una Secretaría de Género y Diversidad. Pero para ahondar aún más en la democracia interna debemos modificar patrones muy arraigados en las organizaciones sindicales; es por ello, que nuestra práctica debe ser coherente con nuestro discurso.

Tenemos la convicción de que debemos incorporar la paridad en los cargos del Cispren, tanto de Comisión Directiva, comisiones administrativas de las seccionales así como en el Cuerpo de Delegados. Porque si estamos convencidos/das que hay que cambiar la realidad a las que nos somete el capitalismo y su sistema neoliberal; si estamos convencidos de que militamos para que haya distribución de la renta y por ende justicia social: queremos un gremio donde la palabra y la toma de decisiones valga lo mismo para cualquiera de los géneros.

Tenemos que redoblar la apuesta y declarar al Cispren como un gremio feminista, porque si hay un movimiento antisistémico que está oradando las bases del Patriarcado, sostén político de la opresión, ése es el movimiento feminista.

Si hay un movimiento que sigue dando fuertes peleas antiestablishment y que ha producido un quiebre en el status quo, ése es el movimiento feminista, que es un movimiento profundamente popular.

No alcanza con la paridad o sumar a las compañeras y compañeros, sino que nuestro sindicato debe declararse feminista, porque el feminismo no abraza sólo la causa de la emancipación de los cuerpos sino de la emancipación popular en sus distintas formas de dominación y es por lo tanto, antiimperialista.

La pelea por la equidad, compañeros, es de clase pero también de género, porque ésa es la doble explotación que nosotras vinimos a visibilizar en las calles, con el estandarte de nuestras víctimas, que nos dan fuerzas para seguir la lucha.

El Cispren ha defendido a los pueblos originarios, a la diversidad cultural, hemos defendido el agua, las causas ambientales. En todas esas luchas también estuvimos y estamos nosotras.

Entonces, es un anhelo que este Congreso defina al Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de la Provincia de Córdoba como un sindicato feminista, para que la justicia social que le exigimos al Estado empiece en nuestra casa. Y no habrá justicia social mientras no derrotemos no sólo al neoliberalismo sino también al Patriarcado.

***Secretaria General del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren-CTA). Secretaria de Comunicación y Difusión de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA Autónoma**